

Señor

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (REPARTO)**

E.

S.

D.

MEDIO DE CONTROL: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.**

ACCIONANTES: **CLAUDIA PATRICIA CABAL TASCON, JULIA MARIA MARMOLEJO HIDALGO, GILMA CASTRILLON, GEMA LIGIA PELAEZ TORRES, LUZ DARY VALENCIA ESGUERRA, MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE RODRIGUEZ, GERARDO LEON MOLINA SANCHEZ, LUCIA SERNA SANCHEZ Y FABIO DE JESUS VALENCIA SANTA.**

ACCIONADO: **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

### **I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES**

**CESAR AUGUSTO BAHAMON GOMEZ**, mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado con la cédula de ciudadanía No 7.688.723 Expedida Neiva (H) y con Tarjeta Profesional No.149.100 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de los(a) señores(a) **CLAUDIA PATRICIA CABAL TASCON**, identificada con la C.C. No. 38.867.959 de Buga (Valle Del Cauca), **JULIA MARIA MARMOLEJO HIDALGO** identificada con la C.C. No. 38.852.373 de Buga (Valle Del Cauca), **GILMA CASTRILLON**, identificadas con cédula de ciudadanía No. 38.858.634 de Buga (Valle Del Cauca), **GEMA LIGIA PELAEZ TORRES**, identificada con la C.C. No. 29.598.724 de la Victoria (Valle Del Cauca), **LUZ DARY VALENCIA ESGUERRA**, identificada con la C.C. No. 38.853.996 de Buga (Valle Del Cauca), **MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE RODRIGUEZ**, identificada con la C.C. No. 31.261.603 de Cali (Valle Del Cauca), **GERARDO LEON MOLINA SANCHEZ**, identificado con la C.C. No. 14.879.884 de Buga (Valle Del Cauca), **MARTHA LUCIA SERNA SANCHEZ**, identificada con la C.C. No. 38.850.823 de Buga (Valle Del Cauca), **FABIO DE JESUS VALENCIA SANTA**, identificado con la C.C. No. 14.872.271 de Buga (Valle Del Cauca), manifestamos que presentamos demanda contenciosa administrativa del **MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL**, contra el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, representada legalmente para estos efectos por el alcalde **JULIAN LATORRE**, residente en Buga, por quien sea o por quien haga sus veces o por el apoderado especial que para este caso se designe en el momento de la notificación del auto admisorio de la demanda, con el fin de que previos los trámites del procedimiento ordinario se declare la nulidad del acto administrativo que especifico en el acápite de pretensiones.



## II. PRETENSIONES

**PRIMERA:** Que es **NULO** del Acto Administrativo expreso, distinguido con el No. 2016RE1973 del 26 de agosto de 2016, notificado el 16 de septiembre de 2016, el cual se petitionó por medio de solicitud con Radicado No. 2016 PQR 4915 del 4 de agosto de 2016, realizada al **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, en la cual se solicita reconocimiento y pago de la prima académica de cada uno de los accionantes, consistente un pago equivalente al **QUINCE POR CIENTO (15%)** sobre el sueldo básico, según la Ordenanza 125 del 21 de diciembre de 1968.

Como consecuencia de la anterior declaración a título del restablecimiento del derecho:

**PRIMERA:** Se **ORDENE** a la entidad demandada, el reconocimiento, y pago de la prima académica a los docentes CLAUDIA PATRICIA CABAL TASCON, JULIA MARIA MARMOLEJO HIDALGO, GILMA CASTRILLON, GEMA LIGIA PELAEZ TORRES, LUZ DARY VALENCIA ESGUERRA, MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE RODRIGUEZ, GERARDO LEON MOLINA SANCHEZ, LUCIA SERNA SANCHEZ y FABIO DE JESUS VALENCIA SANTA, según lo dispuesto por la ordenanza 125 de 1968, desde el 4 de agosto de 2013, por cuanto ya han prescrito prestaciones anteriores y hasta la fecha en que se haga efectivo y regularice el pago de la prima académica, por mis poderdantes laborar como educadores estatales licenciados y por estar cobijados por un régimen especial, salarial y prestacional de orden constitucional y legal, sin que los docentes tengan que solicitarla o reclamarla nuevamente por este mismo concepto.

**TERCERA: ORDENAR** al **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, reconocer y pagar la indexación sobre las sumas de dinero que resulten adeudadas.

**CUARTA: ORDENAR** al **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, reconocer y pagar los intereses comerciales y moratorios sobre las sumas que resulten adeudadas, si a ello hubiera lugar causados desde que se haga exigible la obligación.

**QUINTA: CONDENAR** a la parte demanda al pago de las agencias en derecho y las costas procesales.

Las anteriores pretensiones tienen como fundamento la siguiente relación histórica de:

## III. HECHOS

1. El 22 de octubre de 1997 la señora CLAUDIA PATRICIA CABAL TASCON, ingresó al servicio del Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
2. El 30 de noviembre de 1976 la señora JULIA MARIA MARMOLEJO HIDALGO, ingresó al servicio del Municipio de El Darién- Calima, posteriormente al servicio



DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

del Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.

3. El 16 de diciembre de 1993 la señora GILMA CASTRILLON, ingresó al servicio del Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
4. El 24 de noviembre de 1993 GEMA LIGIA PELAEZ TORRES, ingresó al servicio del Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
5. El 21 de octubre de 1974 LUZ DARY VALENCIA ESGUERRA, ingresó al servicio del Municipio de Restrepo y posteriormente al Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
6. El 31 de agosto de 1977 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE RODRIGUEZ, ingresó al servicio de Restrepo y posteriormente al Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
7. El 8 de octubre de 1993 GERARDO LEON MOLINA SANCHEZ, ingresó al servicio del municipio de Yotoco y posteriormente al Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
8. El 11 de enero de 1990 LUCIA SERNA SANCHEZ, ingresó al servicio del Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
9. El 2 de mayo de 1987, FABIO DE JESUS VALENCIA SANTA, ingresó al servicio del Departamento del Valle del Cauca y posteriormente al Municipio de Buga, y labora actualmente para dicho municipio como docente de tiempo completo.
10. Desde el primer día de sus vinculaciones, los accionantes prestaron sus servicios personalmente y de manera continua al servicio de la educación oficial en el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, encontrándose subordinados a las autoridades educativas de dicho Municipio y del establecimiento en el cual fueron ubicados para desempeñar la labor docente.
11. A mis representados a la fecha no se le ha cancelado la Prima Académica, consistente un pago equivalente al **QUINCE POR CIENTO (15%)** del salario básico devengado por mis poderdantes a la fecha posesión el nominador era la SECRETARIA DE EDUCACION -GOBERNACION DEL VALLE.
12. El día 4 de agosto del año 2016 se radico ante el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- SECRETARIA DE EDUCACIÓN** una petición con Radicación No. 2016 PQR 4915, tendiente al reconocimiento y pago de la Prima de Académica, la cual fue resuelta negativamente mediante comunicación No. 2016RE1973 del 26 de agosto de 2016.
13. Como en este proceso se busca proteger el derecho ciertos e indiscutibles, las partes involucradas en la eventual controversia judicial, no están en



posibilidad jurídica de conciliar tal derecho, por ser de carácter irrenunciable; las condiciones para su reconocimiento están señaladas en la ordenanza 125 de 1968 y ella no puede ser objeto de negociación por ninguno de los extremos por ser de orden público, razón para efectos de agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, por lo que, dentro del término legal no se presentó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial Administrativa.

#### IV. NORMAS VIOLADAS

Las normas violadas en relación con la declaratoria de nulidad del Acto Administrativo expreso distinguido con el No. 2016RE1973 del 26 de agosto de 2016 el cual se petitionó por medio de solicitud con Radicado No2016 PQR 4915 del 4 de agosto de 2016, realizada al **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, en la cual se solicita el reconocimiento y pago de la Prima Académica de cada uno de los accionantes, consistente en un pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el sueldo básico, según el artículo 3 de la Ordenanza 125 del 21 de diciembre de 1968, son las siguientes:

- Constitución política artículos 1, 2, 25, 29, 53
- Artículo 3 de la Ordenanza 125 de 1968, en concordancia las siguientes normas:
  - ✓ Artículo 2 de la Ley 91 del 31 de diciembre de 1989
  - ✓ Artículo 1 del Decreto 1440 de 1992
  - ✓ Numeral 1 del acápite 5 de la circular 001 del 28 de agosto de 2002
  - ✓ Artículo 54 y 57 del acto legislativo 03 de 1910

Las anteriores normatividades disponen:

#### • CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Preámbulo:

*"EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA (Negrillas por fuera del texto original)."*(Negrillas por fuera del texto original).

**"ARTICULO 1.** *Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la*



*solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.*"(Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

**"ARTICULO 2.** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y **garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;** facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo." (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

**"ARTICULO 25.** El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas."

**"ARTICULO 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

**Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.**

(...)" (Negrillas y subrayas por fuera del texto original).

**"ARTICULO 53.** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

*Igualdad de oportunidades para los trabajadores; **remuneración mínima vital y móvil**, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; **irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales**; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; **situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho**; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; **garantía a la seguridad social**, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.*

**El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.**

*Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.*



*La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Negritas y Subrayado por fuera del Texto Original)*

- **ORDENANZA No. 125 de DICIEMBRE de 1968**

*“por la cual se reconoce un aumento de sueldo a los profesores de los establecimientos oficiales de educación media dependientes del Departamento, a partir del 1º de marzo de 1969 concede una autorización respecto a los sueldos del Personal Docente de Primaria.*

**LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, en uso de sus facultades legales,

**ORDENA:**

(...)

**Artículo 3º:** *A los profesores licenciados se les reconocerá además de una Prima Académica del 15% sobre el sueldo básico que regía a 28 de febrero de 1968”*

- La denominada Prima Académica es **SALARIO** y no **PRESTACIÓN**. Así lo reconoció el Honorable Consejo de Estado en Sentencia 4351 de marzo 25 de 1992.
- La ley 91 del 31 de diciembre de 1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y está en plena vigencia en el artículo 2, parágrafo, estipula:

**“Artículo 2. PARAGRAFO** – *las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que venían rigiendo en cada entidad territorial en el momento que entrara en vigencia la ley 43 de 1975.”*

- Decreto 1440 de 1992:

**“Artículo 1.** *Aquellos docentes oficiales que al entrar en vigencia la ley 4 de 1992 se encontraban en las situaciones previstas en el Decreto Ley 2277 De 1979 Y La Ley 91 De 1989, conservaran los derechos adquiridos a esa fecha consagrados en tales Normas”.*

- Numeral 1 del acápite 5 de la circular 001 de agosto 28 de 2002, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

*“J. Los factores salariales que no son prestación social sino salario, tales como la Prima De Servicios, Gastos De Representación, Prima Técnica, Auxilio De Transporte, Auxilio De Alimentación Y Bonificación De Servicios Prestados a que se ha hecho referencia para la liquidación de las diferentes Prestaciones Sociales, se tendrá en cuenta en la*



*medida en que hayan sido establecidos por el respectivo Departamento, Distrito o Municipio mediante Ordenanza o Acuerdo”.*

- Acto legislativo 03 de 1910

**Artículo 54.** *Corresponde a las asambleas: Numeral 5. La creación y supresión de Circuitos de Notaría y de Registro y la fijación del número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos.*

**Artículo 57.** *Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma que prescriba la ley.*

## V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Es importante resaltar que la ordenanza 125 de 1968, la cual rige desde su sanción, es decir, desde el 29 de noviembre de 1968, quedando en firme dentro del acto legislativo No. 03 de 1910 y ratificado en el Acto legislativo 01 de 1945 que concede a las Asambleas Departamentales la facultad para fijar el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos.

Es cierto pues que posterior a este Acto Legislativo No. 03 de 1910, entro a regir el Acto Legislativo 01 de 1968, que entro en vigencia el 11 de Diciembre de 1968 (Posterior a la ordenanza 125 de 1968) el cual estableció que las Asambleas por medio de las ordenanzas les correspondía determinar a iniciativa del gobernador, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo y a los Gobernadores les atribuyó la fijación de los emolumentos, en este sentido a partir del acto legislativo 01 de 1968 las asambleas no tenían la facultad de crear salarios o factores salariales, lo cual se reiteró con la Constitución de 1991.

En concordancia, y en cumplimiento del mandato constitucional, la asamblea departamental del Valle del Cauca expidió la ordenanza 125 del 29 de noviembre de 1968, en la que se ordenó un aumento salarial del 15% sobre el salario básico, llamado prima académica. Sin embargo, de acuerdo al acto legislativo citado lo que la asamblea autorizó fue un aumento y no una prima extralegal.

Es preciso señalar que según lo establecido en el artículo 54 del acto legislativo 03 de 1910, las Asambleas estaban facultadas para establecer el régimen salarial de los docentes de la siguiente manera:

**Artículo 54.-** *Corresponde a las Asambleas: 1. Reglamentar por medio de ordenanzas y de acuerdo con los preceptos constitucionales los establecimientos de instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren costeados con fondos del Departamento; 2. Dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los recursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la colonización de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de caminos y de canales navegables, la construcción de vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del*



*Departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos y cuanto se refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno; 3. Organizar las Contadurías o Tribunales de Cuentas de los Departamentos, nombrar los Contadores o Magistrados correspondientes y presentar sendas ternas para el nombramiento de los Fiscales de los Tribunales y Juzgados Superiores y de sus respectivos suplentes; 4. Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base de la población que determine la ley, y segregar o agregar términos municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso; 5. La creación y supresión de Circuitos de Notaría y de Registro y **la fijación del número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos**; y, 6. Llenar las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes. (Negrilla fuera de texto)*

Mientras que el artículo 57 manifiesta lo siguiente:

**Artículo 57.-** *Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma que prescriba la ley.*

Al respecto en Sentencia del Consejo De Estado sala De Lo Contencioso Administrativo sección Segunda con radicación número 15001-23-31-000-2007-00902-01(2031-09) Magistrado Ponente DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, manifiesta lo siguiente:

*a) El régimen de competencias establecido en vigencia de la Constitución Política de 1886, antes de ser modificada por el Acto Legislativo No. 1 de 1968.*

*La Constitución de 1886, reformada por los Actos Legislativos No. 3 de 1910 y No. 1 de 1945, en su artículo 76 le confirió al Congreso la función de "Crear todos los empleos que demande el servicio público, y fijar sus dotaciones", y, asimismo, autorizó a esa Corporación Legislativa para "conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales", situación que fue reproducida en el artículo 187 ibídem, señalando que "Las Asambleas Departamentales, además de sus atribuciones propias, podrán ejercer otras funciones por autorización del Congreso."*

*A su turno, el citado Acto Legislativo de 1910, facultó directamente a las Asambleas para fijar "el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos", facultad que fue ratificada por la Ley 4ª de 1913.*

*Por su parte, el referido Acto Legislativo de 1945, reiteró tanto la autorización para que el Congreso confiriera atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales, como la facultad conferida por el Acto Legislativo de 1910, para que éstas fijaran el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sus sueldos.*

*En este orden, bajo la vigencia de la normatividad en cita, los entes territoriales tenían competencia para fijar los "sueldos" de sus empleados.*



De la misma forma se hace necesario distinguir el carácter salarial que tiene la prima académica, teniendo en cuenta que no es un derecho de orden general, sino particular y concreto que atiende un factor subjetivo, esto es, al nivel de profesionalización, los docentes que acrediten la calidad de licenciados. Por lo anterior, el salario corresponde a una suma de varios valores que corresponden a varios elementos salariales, de los cuales, de conformidad con cada régimen prestacional aplicable, algunos de ellos se tienen en cuenta para las prestaciones sociales, es decir, como factores salariales.

En ese orden de ideas, es preciso manifestar que el 15% de la ordenanza 125 de 1968 tiene la característica de factor salarial, toda vez que se creó para retribuir directamente los servicios del trabajador y no pretende cubrir una contingencia a la que pudiera verse sometido. Además, el aludido porcentaje sería liquidable sobre la asignación básica devengada por el servidor, esto es, la retribución correspondiente a cada empleo en atención a los estudios realizados, es decir docentes licenciados.

Resulta oportuno, para resolver sobre la legalidad de la ordenanza 125 de 1968, hacer algunas observaciones sobre la formación del acto administrativo, esto es, sobre aquellos elementos que contribuyen a su nacimiento en condiciones de validez, como también sobre aquellos aspectos que tienen que ver con la publicidad de los mismos, los cuales determinan su eficacia y oponibilidad.

Inicialmente se menciona a través de la Jurisprudencia del Consejo de Estado frente al nacimiento del acto administrativo a la vida jurídica que el acto administrativo tan solo nacía al mundo del derecho una vez se hubiera cumplido con el procedimiento de la notificación o publicación, bajo el criterio de que como era de la esencia del acto administrativo la manifestación de voluntad de la Administración, si ésta no se había exteriorizado mediante la notificación o publicación, no existía acto administrativo e inclusive se llegó a sostener que su falta de promulgación significaba su no vigencia y, por lo tanto, no podía ser enjuiciado, tesis que luego fue modificada en el sentido de señalar que debían ser admisibles las demandas contra actos no promulgados, con el fin de decidir sobre la nulidad de los mismos por ausencia de requisitos de forma.

Posteriormente esta tesis cambio a la que en la actualidad está vigente; es decir, el acto administrativo nace a la vida jurídica en el momento mismo en que la Administración adopta una decisión encaminada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, independientemente de que dicha decisión hubiere sido notificada o publicada, es decir que el acto administrativo existe desde su expedición en legal forma, esto es con el cumplimiento de todos los elementos esenciales para su validez y, por lo tanto, el deber de notificación o publicación en manera alguna constituye presupuesto de su existencia. *"Vale decir que la notificación o publicación de los actos administrativos tiene como finalidad producir efectos jurídicos para que dichas decisiones de la Administración, adoptadas en legal forma, sean obligatorias u oponibles frente a los administrados, esto significa, que la publicidad del acto constituye presupuesto de su eficacia. Nota de Relatoría: Ver Auto de 11 de septiembre de 1969, Magistrado Ponente: Miguel Lleras Pizarro; anales del Consejo de Estado No. 423 y 42".*



Sobre la publicidad del acto administrativo el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

*"Como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, la publicidad es un requisito externo al acto administrativo que impide su oponibilidad frente a los particulares y, por tanto, su eficacia, pero en ningún caso afecta su existencia y validez: "La falta de publicación de los actos administrativos no es causal de nulidad, porque no constituye un elemento intrínseco sino extrínseco de los mismos. De tal manera que dicha irregularidad solo afecta su eficacia más no su validez".<sup>1</sup>*

Finalmente, sobre la existencia, la validez y la eficacia del acto administrativo, el Consejo de Estado dice:

*"Los textos de carácter positivo transcritos, reiteran que la publicación de los actos administrativos constituye requisito para su eficacia, toda vez que dicha formalidad legal se exige para que tales actos produzcan efectos en el mundo del derecho y la Administración pueda oponerlos a los administrados; así mismo reconocen la existencia del acto administrativo o decisión emanada de la Administración, previamente a ser notificado o publicado; en otras palabras, dichos textos normativos admiten que la existencia y validez del acto administrativo no dependen de su publicidad. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en distintos pronunciamientos, ha reiterado que la existencia del acto administrativo precede a la publicación o notificación del mismo; igualmente ha determinado que la ausencia de este requisito no constituye causal de nulidad, por cuanto la validez del acto depende de que éste reúna sus elementos esenciales al momento de su existencia"<sup>2</sup>*

Con los argumentos anteriores queda plenamente demostrado que la ordenanza 125 de 1968 en el momento de su existencia, es decir el 29 de noviembre de 1968, la Asamblea del valle del Cauca tenía la competencia para crear sueldos para los docentes licenciados.

Se hace oportuno traer a colación lo manifestado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en Sentencia con radicación No. 11001-03-06-000-2008-00009-00 C.P WILLIAM ZAMBRANO CENTINA, en la que dijo o siguiente:

Precisamente, en relación con las ordenanzas que durante el régimen constitucional anterior crearon factores salariales para los empleados territoriales<sup>1</sup>, **en especial primas o sobresueldos por antigüedad**, esta Sala ya había señalado en Concepto 1518 del 11 de septiembre de 2003, ratificado muy recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sentencia del 24 de julio de 2008<sup>3</sup>, que tales actos no perdieron su vigencia con la nueva Constitución ni con la Ley 4ª de 1992, en la medida que (i) fueron expedidos con base en normas que en su momento atribuían esa facultad a las entidades territoriales; (ii) el nuevo marco constitucional y legal

<sup>1</sup> Consejo de Estado. 8 de agosto de 2011. Exp: 2004-344.

<sup>2</sup> Consejo de Estado. Sec. 3. Radicación número: 70001-23-31-000-1996-03070-01(16016).



no derogó la normatividad anterior, pues se limitó a cambiar las competencias para la modificación o regulación a futuro de los factores salariales de los empleados territoriales; y (iii) el nuevo ordenamiento constitucional y legal no proscribía la remuneración por antigüedad, de manera que respecto de las normas anteriores a la Constitución de 1991 que las consagraron no hay, materialmente, un problema de inconstitucionalidad sobreviniente ni tampoco cabe plantear la excepción de inconstitucionalidad. Dijo la Sala al respecto:

*"Las disposiciones de orden constitucional expedidas con posterioridad a la expedición de dicha ordenanza modificando la competencia de las Asambleas Departamentales no tienen la virtualidad de afectar per se la validez de la disposición. La competencia del órgano autor del acto jurídico debe someterse a las normas vigentes en el momento en que dicho acto nació a la vida jurídica.*

*(...) Así las cosas, las normas expedidas por una autoridad competente conservan su vigencia hasta tanto la autoridad a la que le fue atribuida dicha competencia la ejerza y expida una nueva reglamentación*

*(...)*

*Como quiera que la situación descrita anteriormente es palmariamente la misma de la consulta, y que los pronunciamientos en torno al tránsito de legislación acogidos por la Corte Constitucional parten de la regla de la permanencia de la legislación preexistente, resulta claro, para esta Sala que respecto a la Ordenanza Departamental No. 13 de 1947, no es predicable ninguno de los dos fenómenos jurídicos a que se ha hecho alusión en el presente capítulo [se refiere a la inconstitucionalidad sobreviniente y a la excepción de inconstitucionalidad], en la medida en que materialmente, la consagración del incremento por antigüedad como factor salarial no está proscrito por la Carta, por el contrario, es el propio artículo 58 de la Constitución, el que protege(Corchetes fuera de texto, se subraya).*

En el mismo sentido se pronunció en Sentencia nº 05001-23-31-000-2005-07607-01(1552-10) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 12 de octubre de 2011 dijo lo siguiente:

*"Con base en los anteriores postulados, resulta válido afirmar que las referidas primas tienen la naturaleza salarial, toda vez que se crearon para retribuir directamente los servicios del trabajador y no para cubrir una contingencia a la que pudiera verse sometido. Aunado a lo anterior, las primas en comento, se crearon en atención a las funciones y responsabilidades asignadas y a los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio. Así pues, no se vislumbra que las referidas primas se hubiesen creado con un fin diferente a la de retribuir tanto el servicio prestado como las calidades del docente beneficiario de la misma como para despojarles el carácter salarial que realmente tienen. Además, es fácil inferir de la simple lectura de los textos acusados que las mismas no pretenden compensar las especiales circunstancias en que se presta el servicio, o cubrir las contingencias o eventuales riesgos en que pueda encontrarse el empleado por laborar en condiciones desfavorables, para pensar que encajan dentro de las*



*denominadas prestaciones sociales. En ese orden de ideas, se tiene que, desde la reforma constitucional de 1968, se establece una competencia compartida y concurrente en materia salarial, pues tanto el Presidente de la República, como los Gobernadores, podían fijar los emolumentos de los empleados de sus dependencias, siempre con sujeción a las leyes o normas expedidas por el Congreso y las Asambleas.*

Conforme a lo anterior es dable manifestar que la prima académica nació a la vida jurídica conforme a la ley vigente y fue expedida por la autoridad **COMPETENTE**, por lo que se debe considerar que es una prestación de orden legal y no extra legal.

como se demostró en renglones precedentes y con la jurisprudencia vigente, la ordenanza 125 de 1968 fue expedida conforme a derecho por la autoridad competente y no ha sido derogada por norma posterior ni anulada conforme estipula la ley.

Lo anterior es ratificado por el Secretario General De La Asamblea Departamental Del Valle del Cauca el señor **JUAN PABLO LÓPEZ MORALES**, en escrito del 20 de mayo de 2016, dirigido al señor LAUREANO CASTELLANOS HOYOS, manifestando, que la ordenanza 125 del 29 de noviembre de 1968 "*se encuentra vigente y no ha sufrido cambios ni derogatorias*".

## PRUEBAS

### DOCUMENTALES

Aporto los siguientes documentos:

#### PARA TODOS LOS ACCIONANTES EN GENERAL

- Resolución No. 2016RE1973 del 26 de agosto de 2016.
- Reclamación administrativa con radicado No.2016PQR4915 del 4 de agosto de 2016.
- Copia de la ordenanza 125 de 1968.
- Copia simple de escrito de fecha 20 de mayo de 2016 expedido por el señor **JUAN PABLO LÓPEZ MORALES**, Secretario General De La Asamblea Departamental Del Valle del Cauca, dirigida al señor LAUREANO CASTELLANOS HOYOS.
- Escrito expedido por el señor JAIME GALINDEZ VALENCIA, secretario general de la Asamblea Departamental del Valle del cauca, dirigido al doctor CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA, entonces Jefe Oficina Jurídica de la Secretaria de educación Departamental de data 17 de septiembre de 2013.

#### PARA CLAUDIA PATRICIA CABAL TASCON

- Poder para actuar.
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía.



- Fotocopia de Diploma de la Universidad Central del Valle Del Cauca, Licenciada en Educación Física.
- Decreto No. 3433 del 22 de octubre de 1997.
- Resolución No. SEM-1900-980 del 10 de diciembre de 2013.
- Desprendibles de pago de los meses de marzo, abril y mayo de 2016.

**PARA JULIA MARIA MARMOLEJO HIDALGO**

- Poder para actuar.
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
- Acta de grado No. 310 del 21 de septiembre de 1989, Licenciada en Educación Básica Primaria.
- Decreto No. 1615 del 30 de noviembre de 1976.
- Resolución No. B-69784 del 21 de julio de 1998.
- Desprendibles de pago de los meses de marzo, abril y mayo de 2016.

**PARA GILMA CASTRILLON**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Acta de grado No. 284 del 30 de julio de 1988, Licenciada en Educación Preescolar.
- Decreto No 2984 del 16 de diciembre de 1993.
- Resolución No 1683 del 15 de septiembre de 2011.
- Desprendibles de pago de los meses de marzo, abril y mayo de 2016.

**PARA GEMA LIGIA PELAEZ TORRES**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Acta de posesión del 24 de noviembre de 1973.
- Acta de grado No. 118 del 20 de junio de 1986, Licenciado en educación Primaria.
- Resolución No. 192582 del 3 de diciembre de 2002.
- Desprendibles de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2016.

**PARA LUZ DARY VALENCIA ESGUERRA**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Decreto No. 1702 del 21 de octubre de 1974.
- Fotocopia de Diploma, Licenciada en Educación Primaria.
- Resolución No. 1-75990 del 24 de septiembre de 1999.
- Desprendibles de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2016.



**PARA MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE RODRIGUEZ**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Decreto No. 1448 del 31 de agosto de 1977.
- Constancia Acta de grado No. 0115 del 21 de marzo de 1986, Licenciada en Educación Primaria.
- Resolución No. 053943 del 25 de enero de 1996.
- Desprendibles de pago de los meses de marzo, abril y mayo de 2016.

**PARA GERARDO LEON MOLINA SANCHEZ**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Acta de posesión No. 209 del 26 de octubre de 1993.
- Decreto No. 2422 del 8 de octubre de 1993.
- Fotocopia diploma, Licenciado en Filosofía.
- Resolución No. C 86553 del 27 de marzo de 2001.
- Desprendibles de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2016.

**PARA MARTHA LUCIA SERNA SANCHEZ**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Decreto 0047 del 11 de enero de 1990.
- Fotocopia Diploma, Licenciada en Educación Primaria.
- Resolución No. H-78046 del 24 de septiembre de 1999.
- Desprendibles de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2016.

**PARA FABIO DE JESUS VALENCIA SANTA**

- Poder para actuar.
- Copia de la cedula de ciudadanía de mi mandante.
- Decreto 0393 del 21 de marzo de 1987.
- Acta de grado No. 284 del 30 de julio de 1988.
- Resolución No. 054339 del 6 de febrero de 1996.
- Desprendibles de pago de los meses de abril, mayo y junio de 2016.

**ANEXOS**

- Los documentos enunciados en el capítulo de pruebas.
- Copia de la demanda con sus respectivos anexos para el archivo del Juzgado.
- Copia de la demanda con sus respectivos anexos para el traslado de las partes demandadas.
- Copia de la demanda en medio magnético (CD) para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



## PROCEDIMIENTO

El procedimiento es de NULIDA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS LABORALES consagrado en el artículo 138 de la ley 1437 de 2.011.

## COMPETENCIA Y CUANTIA

Es competente este Juzgado Contencioso Administrativo para conocer de la presente demanda. según los artículos 155 y 157 Ley 1437 CPACA, el conocimiento de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral lo tienen los Juzgados Administrativos en Primera Instancia, siempre y cuando su cuantía no exceda de 50 salarios mínimos mensuales, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. Teniendo en cuenta que la pretensión mayor es la de GILMA CASTRILLON, por cuanto el salario básico de la docente accionante es de \$3.120.336 conforme a los desprendibles de pago, la cuantía de la demanda se estima en **DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS** (\$19.424.092).

## ESTIMACIÓN RAZONADA

La cuantía la estimo en la suma de \$ 19.424.092

Teniendo en cuenta que mis poderdantes no han recibido la Prima Académica por laborar como educadores estatales Licenciados, correspondiente al quince por ciento (15%) del salario básico de cada uno de mis representados, los cuales se utilizaron para realizar los cálculos matemáticos, desde el mes de agosto del año 2013, hasta el mes de diciembre de 2016, por lo cual estimo que le deben aproximadamente a cada uno de mis poderdantes los siguientes valores: (ver cuadro anexo)

NOMBRES	APELLIDOS	SALARIO BASICO	PRIMA ACADEMICA 15%	DESDE	HASTA	TOTALES
CLAUDIA PATRICIA	CABAL TASCON	\$ 2.475.137	\$ 371.271	4/08/2013	31/12/2016	\$ 15.407.728
JULIA MARIA	MARMOLEJO HIDALGO	\$ 2.739.788	\$ 410.968	4/08/2013	31/12/2016	\$ 17.055.180
GILMA	CASTRILLON	\$ 3.120.336	\$ 468.050	4/08/2013	31/12/2016	\$ 19.424.092
GEMA LIGIA	PELAEZ TORRES	\$ 2.739.788	\$ 410.968	4/08/2013	31/12/2016	\$ 17.055.180
LUZ DARY	VALENCIA ESGUERRA	\$ 3.120.336	\$ 468.050	4/08/2013	31/12/2016	\$ 19.424.092
MARIA DEL CARMEN	MARTINEZ DE RODRIGUEZ	\$ 3.120.336	\$ 468.050	4/08/2013	31/12/2016	\$ 19.424.092
GERARDO LEON	MOLINA SANCHEZ	\$ 2.475.137	\$ 371.271	4/08/2013	31/12/2016	\$ 15.407.728
MARTHA LUCIA	SERNA SANCHEZ	\$ 3.120.336	\$ 468.050	4/08/2013	31/12/2016	\$ 19.424.092



FABIO DE JESUS	VALENCIA SANTA	\$ 3.120.336	\$ 468.050	4/08/2013	31/12/2016	\$ 19.424.092
----------------	----------------	--------------	------------	-----------	------------	---------------

### NOTIFICACIONES

- **PARTE DEMANDADA** el señor Alcalde en la carrera 13 No. 6-50
- **El suscrito** en mi oficina ubicada en la Cali:  
Carrera 3 No. 11 – 32 Oficina 211 Edificio de Profesionales EDMOND ZACCOUR,  
Teléfono: 8816245, Santiago de Cali– (Valle del Cauca).  
E-mail: [bygasociados2015@gmail.com](mailto:bygasociados2015@gmail.com) , Celular: 3147923319.

Del señor Juez, atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**CESAR AUGUSTO BAHAMON GOMEZ**  
C.C. No. 7.688.723 expedida en Neiva (H)  
T.P No.149.100 del C. S. Judicatura

